

Cronología del conflicto mayo-agosto 2006

Conflicto social, neoliberalismo y alternativas en América Latina¹

José Seoane y Clara Algranati

La conflictividad social entre mayo y agosto de 2006

En el segundo cuatrimestre de 2006 la conflictividad social en América Latina y el Caribe –valorada en función de la cantidad de hechos de protesta registrados por el OSAL para 19 países de la región– se incrementó (7,65%) en relación con aquella contabilizada en el primer tercio del año. Dicho crecimiento, que se verifica por segundo cuatrimestre consecutivo, eleva la cifra de registros al valor más alto obtenido desde el inicio, en el año 2000, de esta tarea de seguimiento desarrollada por el OSAL. El mismo expresa particularmente el incremento de los conflictos en las áreas Norte (conformada por México, Centroamérica y el Caribe; 20,7%) y Andina (3,5%). Por otra parte, en el Cono Sur se verifica un número de hechos similar al registrado para el período anterior, y en este caso su disminución para Argentina y Brasil se equilibra con un significativo aumento en Chile, Uruguay y Paraguay.

El crecimiento de la movilización social en el área Andina da cuenta también de diferentes realidades entre los casos de Bolivia, Venezuela y Perú, donde la misma aumenta, y aquellos en que disminuye (Colombia y Ecuador). Pero ciertamente es la evolución de la región Norte la que condensa en mayor medida la tendencia relevada a nivel continental. Por tercer cuatrimestre consecutivo, los registros de protesta en esta área se acrecientan, resultado de los procesos vividos en Honduras, Panamá, Guatemala, México y Nicaragua².

En relación a los sujetos protagonistas de los conflictos, en la comparación intercuatrimestral se destaca el crecimiento de aquellos promovidos por los asalariados del sector público, en particular de los sectores de la salud y la educación pública, mientras que disminuyen las acciones de los trabajadores del sector privado y de los movimientos campesinos e indígenas. Vale la pena resaltar también la expansión de las protestas impulsadas por los estudiantes (especialmente en Chile y Centroamérica) y las referidas a la defensa de los derechos humanos, que reflejan, en cierta medida, la intensificación de los diagramas represivos y de militarización social en el continente.

En este artículo, como es habitual, presentamos un racconto y análisis de los principales hechos acontecidos a nivel regional entre mayo y agosto del presente año –consideraciones que se prolongan incluso en algunos señalamientos referentes a lo ocurrido en los meses siguientes– con la intención de introducir y facilitar la lectura de las cronologías que sobre dicho período se publican a continuación.

Disputas socio-políticas y elecciones en la región Andina

La firma y anuncio del decreto presidencial de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia³ en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores (1/5) habrá de marcar, en el inicio del segundo cuatrimestre de 2006, un nuevo ciclo de intensificación de la polarización y confrontación político-social entre los movimientos populares y las elites conservadoras, que, inscripto en el marco de los intereses y estrategias regionales e internacionales, delinea hoy el futuro del país andino. En este sentido, las disputas alrededor de las formas y alcances de la implementación de dicha resolución y la negociación de los nuevos contratos con las empresas petroleras exigidos por el decreto, y cuyo plazo caducaba a inicios de noviembre, habrán de atravesar, de forma más o menos pública, todo el período.

En este marco, la decisión de avanzar con la nacionalización de los hidrocarburos y el inicio de la bautizada “revolución agraria” signarán la campaña electoral previa a la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente, que tendrá lugar junto a la realización del referéndum sobre las autonomías departamentales a principios de junio. Los resultados

***“Las declaraciones
públicas en relación
con una estrategia
de desestabilización
del gobierno
señalarán la
profundidad de
las tensiones y
los intereses
en juego, así como
los desafíos
que enfrenta
el proceso de
cambio social
en Bolivia”***

electorales habrán de señalar el respaldo mayoritario obtenido por el Movimiento al Socialismo (MAS), que cosechará el 50,7% de los votos válidos y 137 constituyentes sobre los 255 en disputa; en segundo lugar se ubicará la agrupación PODEMOS (del candidato a presidente Jorge Quiroga) con un 15,3% de los votos y 60 estatuyentes. Por otra parte, la negativa a las autonomías departamentales –consigna que había sido promovida por el gobierno y el MAS ya avanzada la campaña electoral– obtendrá a nivel nacional el 57,5% de las preferencias, imponiéndose por el contrario la aceptación de dichas autonomías en los departamentos de la llamada “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). Iniciadas sus tareas a principios de agosto, la Constituyente se abocará a definir su reglamento de funcionamiento, concentrándose en los debates alrededor de dos cuestiones principales: la amplitud de las atribuciones de la misma (entre las opciones de considerarla originaria y plenipotenciaria o derivada y subordinada a los poderes institucionales vigentes) y la forma de adopción de las decisiones (entre la resolución por mayoría absoluta o por los dos tercios, tal como reseñaba el acuerdo parlamentario del que surgiera la convocatoria a la Constituyente). La polarización entre estas opciones –las primeras defendidas por el MAS, especialmente por las representaciones campesino-indígenas; las segundas enarboladas por la coalición conservadora, especialmente sostenidas por las elites de la región de la “media luna”– habrá de incrementarse hasta desembocar en la disputa en el terreno de la movilización social, particularmente alrededor del paro regional convocado por las provincias de la “media luna” (8/9). Finalmente, hacia fines de septiembre la Asamblea Constituyente aprobará –por mayoría absoluta– el primer artículo de su reglamento, sancionando el carácter plenipotenciario, originario y fundacional de la misma.

Desde mayo a agosto, y de manera paralela a este proceso, la conflictividad social en Bolivia habrá de incrementarse en relación a la registrada por el OSAL en el primer trimestre del año. Además de las acciones referidas direc-

tamente a la polarización político-social en relación a la Constituyente y aquellas que despiertan las reformas promovidas por el gobierno (en el terreno agrario o educativo, por ejemplo), una diversidad de otros hechos de protesta tendrá lugar. Entre ellos se cuentan los impulsados por los trabajadores de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que finalmente obtienen la mitad de las acciones de la empresa, y las diferentes protestas impulsadas por los trabajadores de la salud y la educación públicas en reclamo de incrementos salariales y designaciones de personal.

En el marco de la confrontación político-social alrededor de la Constituyente y de la negociación de los contratos petroleros, la intensificación de los conflictos sociales a inicios de octubre –signados por el trágico enfrentamiento entre mineros trabajadores de la Corporación Minera (COMIBOL) y cooperativistas por la explotación del cerro de Huanuni– y las declaraciones públicas en relación con una estrategia de desestabilización del gobierno señalarán la profundidad de las tensiones y los intereses en juego, así como los desafíos que enfrenta el proceso de cambio social en Bolivia.

En otro sentido, el impacto regional de la experiencia boliviana habrá de tener en el período considerado su capítulo específico en relación con las convergencias de los movimientos indígenas y campesinos. Así, a mediados de julio habrá de conformarse la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas en el marco de la reunión realizada en Cusco, Perú con la participación de delegaciones de dicho país, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina⁴. Por otro lado, aunque más allá del período bajo análisis, en la primera mitad de octubre se realizará en La Paz, Bolivia, el Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, que habrá de reunir a miles de indígenas de dicho país, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Guatemala, México, Canadá, Chile y Argentina, entre otros⁵.

En Ecuador, el ciclo de movilizaciones de los primeros meses del año, protagonizado por el movimiento indígena, habrá de culminar a mediados de mayo con la obtención de la caducidad del contrato estatal con la cuestionada petrolera estadounidense OXY. Esta decisión habrá de motivar, por parte del gobierno estadounidense, una nueva suspensión de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países venían desarrollando, convirtiéndose así en una doble conquista para los movimientos sociales que habían hecho de estas dos cuestiones (junto al reclamo de convocatoria a una Asamblea Constituyente) las principales banderas programáticas de sus acciones y convergencias forjadas en los últimos meses. De esta manera, el bloqueo del TLC habrá de prolongarse hasta la definición del resultado de las próximas elecciones presidenciales.

En este contexto, a lo largo del segundo cuatrimestre se constatará una disminución de la conflictividad social respecto del primer tercio del año, cuando se registraran las signi-

ficativas protestas contra la OXY y el TLC. En este caso, en el terreno de la acción colectiva se destacan, por sus similitudes, una serie de conflictos y paros territoriales en diferentes regiones del país. Entre ellos sobresalen las protestas en junio en la provincia de Orellana, desencadenadas ante la desaparición, primero, y por la libertad, después, de un activista de derechos humanos, en ocasión de la represión sufrida por la ocupación de instalaciones de la petrolera Perezco. Ante el paro provincial y las movilizaciones desencadenadas a fines de junio –que incluyen la exigencia de la salida de la petrolera–, el detenido es liberado tras el pago de fianza. Finalmente, a mediados de octubre habrán de realizarse las elecciones presidenciales, parlamentarias y de concejos a nivel provincial y municipal⁶. Según los escrutinios oficiales, cuestionados por su falta de transparencia, el primer lugar corresponderá al empresario bananero Álvaro Noboa (PRIAN) con 26,83% de los votos válidos (excluyendo nulos y blancos), siendo el segundo lugar para Rafael Correa (Alianza PAÍS) con el 22,84%⁷. De esta manera la definición sobre la elección presidencial se prolonga hasta la segunda vuelta entre ambos candidatos (26/11), enfrentados, entre otras cuestiones, en relación con la defensa o rechazo, respectivamente, del acuerdo de libre comercio con EE.UU.

El proyectado TLC Andino con el país del norte quedará así, hasta el momento, acotado a Perú y Colombia, cuyos gobiernos anunciaran en los primeros meses del año la conclusión del mismo. Al igual que en el pasado, en este período en ambos países tendrán lugar movilizaciones y acciones contra dicho acuerdo, protagonizadas particularmente por sectores rurales. En el caso del Perú, donde los hechos de conflicto registrados aumentan respecto del primer cuatrimestre de 2006, estas manifestaciones se concentran entre mayo y junio (24/5, 8/6 y 28/6), impulsadas especialmente por productores agrarios y campesinos, aunque no logran impedir que el acuerdo sea ratificado por el viejo Parlamento –antes de la asunción de los nuevos congresistas elegidos en las recientes elecciones de principios de abril– y promulgado por el presidente saliente Alejandro Toledo. La elección presidencial en la segunda vuelta, a principios de junio, dará el triunfo al candidato del Partido Aprista Peruano (APRA, con el 52,6% de los votos válidos) sobre su contendiente Ollanta Humala (que obtendrá el 47,3%). Así, a fines de julio, Alan García asumirá como nuevo presidente tras 16 años de haber abandonado el mismo cargo. En la configuración del gabinete designará como ministro de Economía y Finanzas a Luis Carranza Ugarte, conocido por sus posiciones neoliberales, anunciando en qué medida habrá de continuarse con la orientación del gobierno anterior.

Tras el recambio presidencial, los conflictos sociales volverán a aparecer en la escena socio-política. Entre ellos, los acontecidos en relación con los emprendimientos mineros, que tienen una intensa y extendida historia en este país. En este caso, pobladores y autoridades locales se movilizarán en Arequipa a lo largo de junio y julio exigiendo el pago de regalías e impuestos a la minera Cerro Verde. Tras arribar a un acuerdo a prin-

cipios de agosto, se abrirá paso un nuevo ciclo de protestas en Cajamarca contra la ampliación del proyecto de la minera Yanacocha. Los bloqueos de rutas y paros regionales se prolongarán hasta la firma del acuerdo provisorio a fines de dicho mes.

En el caso de Colombia, importantes movilizaciones contra el TLC con EE.UU., con una participación significativa del movimiento indígena⁸, precederán a las elecciones presidenciales (28/5) y serán duramente reprimidas. Las elecciones culminarán con la reelección de Álvaro Uribe con el 62% de los votos válidos, quedando en segundo lugar el candidato Carlos Gaviria (22% de los votos). A principios de junio el gobierno anunciará la conclusión de las negociaciones con EE.UU. en relación con el anexo al TLC relativo a temas agrícolas que se encontraba aún pendiente, cerrándose entonces definitivamente las tratativas a la espera de su aprobación por ambos parlamentos⁹. Tras la asunción del nuevo mandato (7/8), y en un clima de amenazas, detenciones y atentados contra activistas sociales y políticos (que ya se había intensificado antes de estas últimas elecciones), diferentes conflictos habrán de tener lugar, entre ellos los protagonizados por los trabajadores de la empresa petrolera estatal contra la venta de las acciones y privatización de la misma, y aquellos impulsados por los trabajadores de la salud pública y el Instituto de Seguridad Social, que finalmente es cerrado en el marco de la propuesta de su reestructuración en tres nuevos entes.

En el mapa electoral del área Andina –junto a la segunda vuelta por las presidenciales en Ecuador y la compulsa municipal en Perú– restan las elecciones presidenciales en Venezuela (3/12), de cara a las cuales diferentes fuerzas de oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez llegan finalmente a un acuerdo y proclaman como candidato a Manuel Rosales, actual gobernador del estado de Zulia. Desde los inicios de la campaña electoral, el escenario de la conflictividad social tendrá como rasgos sobresalientes las protestas de los pobladores por viviendas y

“La activa política continental e internacional desarrollada por el gobierno bolivariano cristaliza en el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, formalizado en julio durante la cumbre presidencial en la ciudad de Córdoba, Argentina”

servicios, y de los trabajadores de la salud pública por aumento salarial e insumos, y las movilizaciones estudiantiles en demanda del mejoramiento de los centros de estudio y el transporte, y en defensa de la autonomía universitaria. La activa política continental e internacional desarrollada por el gobierno bolivariano cristaliza en el ingreso de dicho país al MERCOSUR, formalizado en julio durante la cumbre presidencial en la ciudad de Córdoba, Argentina; en los acuerdos de cooperación con Bolivia y Cuba en el marco del ALBA; y en la continuidad de los convenios alcanzados en materia energética con otros países latinoamericanos, cuya dinámica se prolonga en estos meses en las diferentes giras internacionales que durante mayo, julio y agosto llevarán al presidente venezolano a visitar distintos países de Europa, África y Asia. En el marco de esta activa iniciativa diplomática y de las crecientes tensiones con el gobierno de EE.UU., la próxima votación presidencial de principios de diciembre habrá de interpelar tanto la conducta democrática de la oposición, cuanto las perspectivas del proyecto bolivariano, cerrando en Venezuela el ciclo de elecciones presidenciales y legislativas que atravesara buena parte de los países de la región a lo largo de 2006.

Del libre comercio al ajuste fiscal: el conflicto social en Centroamérica

La geografía de la conflictividad social en América Central en el segundo tercio de 2006 aparece signada, por un lado, por el crecimiento de los hechos de protesta, que se incrementan casi un 23% respecto de los relevados para el primer cuatrimestre del año; por otro lado, por su configuración más fragmentada y diversa en relación con lo acontecido en el pasado reciente. Región cruzada por una trama de acuerdos de libre comercio, obras de interconexión en infraestructura y avances en la coordinación del control territorial policial-militar bajo la expansión de la hegemonía estadounidense hacia el sur del continente, las resistencias y luchas contra estas políticas inspiran la agenda de los movimientos sociales mesoamericanos. En particular, la oposición al TLC con EE.UU. —conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés—, constituida en el punto de articulación de una amplia convergencia socio-política a nivel regional, volverá a levantarse como una de las principales banderas de las movilizaciones multisectoriales y los actos en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores.

Sin embargo, la continuidad del rechazo a dicho acuerdo a lo largo del segundo tercio de 2006 experimentará una menor intensidad y significación tras los avances logrados entre marzo y abril en relación con la aprobación y entrada en vigencia del TLC para El Salvador, Nicaragua y Honduras. A ello se sumará, en mayo, la ratificación parlamentaria de dicho tratado en Guatemala y la posterior aprobación de las reformas legales y los convenios internacionales exigidos por el gobierno estadounidense, que motivarán a la Casa Blanca a proclamar su puesta en marcha para este país a partir del 1 de julio¹⁰.

Frente a este proceso, Costa Rica es el único país centroamericano cuyo Parlamento no ha ratificado dicho TLC, en gran medida por la férrea oposición de los movimientos populares. Convertido en uno de los temas de la reciente elección presidencial (5/2), el ajustado triunfo de Oscar Arias, candidato favorito y promotor del acuerdo, puso de manifiesto tanto la amplitud como los límites del cuestionamiento al mismo. La asunción del nuevo mandatario inauguró un período cruzado por el impulso de reformas políticas y legales de inspiración neoliberal, y orientadas por los requerimientos del TLC. Entre los proyectos tendientes a la apertura de los sectores de telecomunicaciones y seguros y a la privatización de los puertos, diferentes resoluciones de la Sala Constitucional que eliminan beneficios de los convenios colectivos laborales habrán de motivar, entre otras manifestaciones, tanto el paro nacional de los trabajadores del Instituto Nacional de Salud (INS, mayo), como la masiva movilización multisectorial de principios de junio. Sumados a la marcha federal y el paro nacional docente (8/6) contra el proyecto de ley de municipalización de la educación, la oposición a la privatización del puerto de Limón y los cuestionamientos a la ley de desarrollo de los pueblos indígenas abarcarán la serie de los principales conflictos del período, todos ellos enlazados con el rechazo al DR-CAFTA. Hacia finales de agosto la Coordinadora Nacional contra el TLC acordará y divulgará su plan de lucha, convocando a las multitudinarias jornadas de movilización y paro que recorrerán las principales ciudades costarricenses entre el 23 y 24 de octubre, poniendo nuevamente en la calle a la significativa oposición que activamente ha impedido hasta el momento la ratificación parlamentaria del tratado en Costa Rica.

Por otra parte, como ya venía aconteciendo en el último año, la dinámica que asumen las negociaciones de acuerdos de libre comercio en Centroamérica va más allá del referido DR-CAFTA. Un ejemplo de ello serán las tratativas iniciadas por Taiwán con El Salvador y Honduras (tienen lugar la I y II ronda de negociaciones de un cronograma que aspira a concluir durante el presente año) y la firma de similar TLC con Nicaragua. Asimismo, acompañando la ampliación del Plan Puebla Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala habrán de realizar entre junio y agosto tres de las seis rondas de negociación previstas en el TLC con Colombia. Por otra parte, las negociaciones con la Unión Europea (mayo) incentivan las conversaciones de un TLC entre diferentes países del istmo con Panamá, que constituye una de las exigencias del bloque del viejo mundo para avanzar en el referido tratado. Entre julio y agosto nuevas rondas de discusión tendrán lugar entre estos países. Por otra parte, en similar período entrará en vigencia el acuerdo suscrito entre Chile y Panamá, y el Parlamento de este último país ratificará el TLC avenido con Singapur.

En referencia a Panamá, si bien las negociaciones de su TLC con EE.UU. se han postergado hacia delante, dichos intereses parecen reflejarse en el período en cuestión en relación con el proyecto gubernamental de ampliación del canal interoceánico. Las críticas formuladas a dicho proyecto por diferentes organizaciones sociales —entre ellas, las que

vertebraron la resistencia a la reforma de la Caja de Seguro Social, finalmente en gran medida implementada por el actual gobierno— y las diferentes protestas de los trabajadores de la educación y la salud públicas signarán el contexto social frente al cual el gobierno impulsará un referéndum para decidir sobre su proyecto de ampliación. Finalmente, el resultado del mismo —celebrado el 22/10— habrá de convalidar la propuesta oficial, aunque en el marco de una significativa abstención (aproximadamente 60% del padrón electoral) y de denuncias de abusos por parte de grupos vinculados al gobierno (Gandásegui, h., 2006).

Las iniciativas de integración subordinada de América Central bajo la expansión de la hegemonía estadounidense se expresan también en la marcha del Plan Puebla Panamá (PPP) y su iniciativa de interconexión eléctrica regional¹¹. En relación a ello, en el período bajo análisis habrá de inaugurarse la estación eléctrica Tapachula Potencia en el estado mexicano de Chiapas y los trabajos de la primera fase de interconexión eléctrica entre México y Guatemala (junio). Por su parte, en el marco de la VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (julio) se formalizará la incorporación de Colombia como miembro pleno del PPP y se anunciarán la inauguración de los trabajos de la línea principal del Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC) y el apoyo a diferentes emprendimientos hidroeléctricos.

Dichos emprendimientos hubieron de motivar en el pasado reciente numerosos conflictos, así como el surgimiento de movimientos y espacios de coordinación multisectoriales contra la construcción de represas. En efecto, la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua tuvo lugar en Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala (octubre de 2005)¹². En esta ocasión, diferentes acciones de denuncia y movilizaciones se sucederán a ambos lados de la frontera entre El Salvador y Honduras en rechazo de la construcción de la represa binacional El Tigre, que diera origen a la reciente creación del Frente Binacional contra la Construcción de Represas. Asimismo, en Nicaragua, pobladores y autoridades locales de Paiwas también habrán de protagonizar diferentes protestas contra la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Copalar.

Por otra parte, el conflicto alrededor de la energía eléctrica habrá de convertirse en uno de los más importantes para el presente período en este país. A partir de junio, y en un incremento que se prolongará hasta agosto, movilizaciones, cortes de calles y acciones de “desobediencia civil”¹³ de carácter multisectorial, promovidas generalmente por asociaciones de consumidores, recorrerán las principales ciudades frente a los progresivos cortes de luz realizados por la compañía eléctrica española Unión FENOSA, acreedora de la privatización del servicio realizada casi una década atrás. En el cenit de las protestas y los apagones a mediados de agosto, el ente regulador del sector iniciará un proceso de arbitraje contra la compañía eléctrica, mientras que, por otro lado, las movilizaciones exigirán

al gobierno y al Parlamento la cancelación de la concesión del servicio (ver el artículo de Luis Serra en este número).

La disputa sobre la distribución de los costos del incremento de los precios del petróleo también habrá de motivar nuevamente en Nicaragua –así como aconteciera en pasados cuatrimestres y en otros países centroamericanos– el conflicto entre transportistas, estudiantes y gobierno. Bajo el peso de las protestas, el gobierno se verá obligado a avanzar –más allá de la tensa competencia de cara a las próximas elecciones presidenciales (5/11)– en la habilitación de los depósitos portuarios federales necesarios para la implementación de los acuerdos entre la petrolera venezolana (PDVSA) y las alcaldías nicaragüenses (particularmente las gobernadas por el sandinismo) para la provisión de crudo a precios preferenciales. Los conflictos en relación a los precios del transporte, bajo el impacto del crecimiento de los precios del petróleo, también se darán cita en El Salvador, donde estudiantes y pobladores se manifestarán contra el incremento de las tarifas. En relación con estos conflictos protagonizados por estudiantes y jóvenes, su importancia, en términos cuantitativos, será significativa dentro de la conflictividad social desplegada en la región centroamericana en el presente cuatrimestre. Además de los mencionados, vale resaltar la serie de protestas que se inician a principios de julio en Guatemala, impulsadas por los estudiantes de magisterio –y que convocan la adhesión de docentes y padres– frente a la disposición gubernamental que extiende la carrera docente.

También en Guatemala los médicos de la salud pública habrán de promover uno de los principales conflictos en reclamo de aumento salarial y provisión de insumos para los hospitales. Dicha experiencia forma parte de una serie más amplia de protestas y acciones que recorre buena parte de los países centroamericanos y que da cuenta de la resistencia de los trabajadores de la salud y la educación públicas a las políticas de ajuste fiscal adoptadas bajo el consejo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas delegaciones visitan durante estos meses buena parte de

“Las líneas de continuidad y profundización de la gobernanza neoliberal, en la búsqueda de suturar la legitimidad perdida, se caracterizaron por los intentos de construcción de una ‘estatalidad’ autoritaria capaz de garantizar el control territorial y poblacional (Fukuyama, 2004)”

los países del área en el marco de la renegociación de acuerdos y refinanciación de deudas. El peso cuantitativo de las acciones protagonizadas por dicho sector en la conflictividad regional puede apreciarse considerando que las mismas representan el 28% de los hechos relevados para los ocho países centroamericanos y caribeños considerados, siendo que la misma categoría comprende sólo un 18% del total registrado para el conjunto de la región latinoamericana. Entre ellas, además de las ya referidas para Guatemala, vale llamar la atención sobre la prolongada huelga (que se extiende desde noviembre del pasado año), las manifestaciones y las protestas impulsadas por médicos y trabajadores de la salud pública en Nicaragua, que concluyen tras un acuerdo a mediados de mayo; la serie de conflictos que convoca desde esa fecha hasta principios de junio a similar sector en Honduras; y la huelga y las protestas impulsadas por los sindicatos de la Caja de Seguro Social de Panamá. En muchos de estos casos, el reclamo salarial –por su aumento o cobro– habrá de mezclarse con la demanda de provisión de insumos imprescindibles para el funcionamiento de los hospitales públicos, prueba del precarizado estado en que se encuentran. Por otra parte, también los maestros habrán de protagonizar en gran medida la conflictividad social del sector público. Esto se verifica especialmente en Honduras con el prolongado conflicto que desde principios de mayo hasta mediados de agosto protagonizan los docentes –con huelgas, marchas y bloqueos de calles– por la derogación de la ley que modificara el estatuto del sector y en demanda de aumento salarial. Por último, en relación con las protestas impulsadas por los trabajadores del sector público, debe mencionarse también la serie de movilizaciones que se producen ante el cierre de dependencias estatales y la licencia forzosa de decenas de miles de empleados en Puerto Rico, resultado de la disputa entre el gobierno (Partido Popular Democrático, PDP) y la mayoría parlamentaria (Partido Nuevo Progresista, PNP) respecto de la magnitud del gasto fiscal federal y el alcance de una reforma tributaria promovida por el Ejecutivo que descarga el incremento de la recaudación fiscal sobre el consumo, y frente a la cual un sector importante de las organizaciones sindicales habrá de plantear una propuesta impositiva progresiva que no será tenida en cuenta.

Democracia y neoliberalismo de guerra: los movimientos sociales en un contexto militarizado

El creciente cuestionamiento al modelo neoliberal en nuestra América, expresado en el intenso ciclo de resistencias sociales que atravesó a la región en la última década, desembocó en el pasado reciente en una extendida crisis de legitimidad de dicho modelo que, a través de levantamientos sociales y mayorías electorales, rediseñó el escenario de las alternativas en la región. Si la programática y práctica de los movimientos sociales que corpezaron estas confrontaciones supusieron un amplio y rico proceso de experimentación y radicalización democrática¹⁴, por contrapartida las líneas de continuidad y profundi-

zación de la gobernanza neoliberal, en la búsqueda de suturar la legitimidad perdida, se caracterizaron por los intentos de construcción de una "estatalidad" autoritaria capaz de garantizar el control territorial y poblacional (Fukuyama, 2004). A estas cuestiones se refieren, desde diferentes perspectivas, las contribuciones reunidas en el dossier "Democracia y movimientos sociales" de este número de la revista. Bautizadas como "neoliberalismo de guerra" (González Casanova, 2002), estas políticas parecen tender a la constitución de un diagrama que sitúa a la "guerra" como patrón ordenador de las relaciones sociales (Ceceña, 2006), abarcando un conjunto de contrarreformas legales e institucionales orientadas a reforzar la capacidad punitiva del estado, cercenando derechos y libertades democráticas, y promoviendo la represión paraestatal y la criminalización del conflicto social y los sectores populares bajo el retorno del estigma de las "clases peligrosas" que caracterizara tanto a los regímenes oligárquicos de principios del siglo pasado como a las dictaduras "contrainsurgentes" de la década del setenta. Los análisis y debates en relación con estos procesos se han visto reflejados en números anteriores de esta publicación, en particular en el dossier "Criminalización social e 'inseguridad'" incluido en el OSAL N° 14. En este segundo cuatrimestre de 2006, el crecimiento experimentado por las acciones y movilizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos vuelve a resaltar la extensión e intensidad regional que estos procesos asumen.

Por otra parte, también el incremento de la conflictividad socio-política en México a lo largo del período bajo análisis habrá de estar en gran medida relacionado con la disputa sobre la naturaleza y vigencia de la democracia en ese país, y signado por la intensificación de la respuesta represiva por parte del estado. Desde la serie de conflictos sociales que se destacan a lo largo del desarrollo de la campaña electoral (entre ellos, el de los trabajadores mineros y metalúrgicos; el de los pobladores de Atenco que son reprimidos ferozmente a principios de mayo, y la serie de acciones posteriores en rechazo a dicha represión; y el de los docentes del estado de Oaxaca desalojados violentamente de la plaza de la ciudad capital, que desembocará en un levantamiento popular mucho más amplio prolongándose hasta la actualidad), pasando por las multitudinarias manifestaciones que entre principios de julio y septiembre desbordaron el escenario político-institucional por el cuestionamiento a la transparencia y legalidad del escrutinio oficial que diera ganador en la contienda presidencial a Felipe Calderón, y que culminan en la manifestación de la llamada Convención Nacional Democrática que nombra como presidente legítimo a Andrés Manuel López Obrador, hasta la intensidad que asumió la rebelión popular en el estado de Oaxaca bajo la ocupación de la ciudad capital en demanda de la salida del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, la dinámica de la movilización social en México parece mostrar la medida en que la lucha contra las políticas neoliberales se entronca con las disputas sobre la democratización de las formas de gobierno. El análisis y debate sobre este proceso es abordado, desde distintas miradas, en las contribuciones reunidas en el primer dossier del presente número del OSAL, "México: de las elecciones

a Oaxaca”, a las que pueden sumarse también aquellas que sobre la realidad mexicana fueran publicadas en el número anterior de la revista. Al momento de concluir estas líneas, los intentos del gobierno federal de responder a las demandas planteadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) con la intervención represiva de las fuerzas de seguridad en la ciudad capital no sólo amenazan una vez más con la reiteración trágica de la violencia estatal, sino que suman además un nuevo baldón a la cuestionada legitimidad democrática del recambio gubernamental.

En el marco regional, la promoción del referido “neoliberalismo de guerra” va a sumar diferentes hechos a lo largo de este segundo tercio de 2006. Por un lado, un creciente clima represivo signado por amenazas y asesinatos de activistas sociales y políticos y por atentados a locales de organizaciones sociales parece intensificarse en el período previo y posterior a las elecciones presidenciales en Colombia y Guatemala, especialmente en los meses de mayo y junio¹⁵. A ello debe sumársele, además de los hechos en México ya referidos, la desaparición en Argentina de Jorge Julio López –detenido-desaparecido durante la pasada dictadura militar y testigo en el juicio a un represor que concluyera recientemente con su condena– y la serie de amenazas que se extienden sobre otros testigos, activistas y organismos de derechos humanos.

Por otra parte, el estímulo de un modelo que persigue el involucramiento o integración de sectores de la sociedad civil en las tareas desarrolladas por las fuerzas de seguridad –y que es particularmente impulsado en Colombia, Perú y Paraguay– se expresa, entre otros hechos, en la juramentación e incorporación al “Plan Integral de Seguridad Ciudadana” de 600 juntas vecinales en Perú (julio). La promoción por parte de los organismos internacionales de la llamada *accountability* social parece reflejarse también en la aparición de iniciativas públicas en reclamo de “seguridad” (Murillo, 2005) alrededor de una programática que demanda el incremento de la acción punitiva estatal y del estado penitenciario¹⁶ (Wacquant, 2000). Dichas acciones han venido incrementando su significación e importancia en los últimos años en numerosos países de la región. En relación a lo expresado, para este período vale reseñar las movilizaciones acontecidas en Argentina, Ecuador y República Dominicana (en lo relativo a Argentina pueden consultarse las reflexiones volcadas en el último punto del presente artículo, dedicado a lo acontecido en el Cono Sur). En una línea similar, deberíamos mencionar también las movilizaciones “por la paz y contra la violencia” que tienen lugar en diferentes ciudades hondureñas, convocadas, entre otros, por las autoridades nacionales y municipales, y que cuentan con el apoyo del Programa Paz y Convivencia financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el marco de estas movilizaciones, se aprueba en República Dominicana una modificación al Código Penal que contempla el endurecimiento de las penas, y entra en vigen-

cia un “plan de acción inmediato” que incrementa el control policial y militar nocturno. A su vez, se registran diferentes protestas contra agresiones perpetradas por patrullas policiales. En este mismo sentido, entre los proyectos de reformas legislativas del período también vale resaltar la aprobación de la ley contra la delincuencia organizada en Guatemala, que transfiere potestades al gobierno para actuar en ciertos casos sin orden judicial previa; la propuesta del gobierno costarricense de habilitar y sumar a las empresas de seguridad privada a las tareas policiales; y el proyecto gubernamental que facilita la penalización del bloqueo de carreteras en Honduras. Por otra parte, en El Salvador, en abril, la iniciativa oficial de penalizar los llamados “delitos en masa” se refleja en el accionar policial, particularmente en el mes de julio, cuando manifestantes son detenidos bajo el amparo de dicha normativa. En este sentido, además de los casos ya referidos, la actitud represiva de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones y protestas habrá de hacerse sentir especialmente en Centroamérica y Chile frente a las movilizaciones estudiantiles, y en Colombia ante las marchas contra el TLC. Por último, sobre dicha cuestión, vale también reseñar la continuidad de un clima de amedrentamiento y persecución sobre los movimientos sociales de carácter rural.

La promoción de este diagrama punitivo encuentra muchas veces su justificación en el ensalzado combate al narcotráfico y el terrorismo. Desde estas premisas, el tratamiento de la cuestión de la seguridad —que pretende instalarse como primer punto de la agenda pública— sirve a legitimar una política de coordinación regional de las fuerzas policiales y militares en el continente bajo el mando de EE.UU. En este marco podrían inscribirse como ejemplos los reiterados operativos realizados por fuerzas militares y policiales guatemaltecas, próximos a la frontera norte (con México), para combatir el tráfico de drogas, así como los acuerdos alcanzados en el terreno de las fuerzas armadas centroamericanas. Por otra parte, las declaraciones del fiscal general de Paraguay señalando la existencia de actividades guerrilleras en este país con apoyo de las FARC —que fueran verbalizadas también por el embajador estadounidense— reiteran durante estos meses, en el caso del país guaraní, las denuncias oficiales de la expansión y coordinación regional de presuntas organizaciones guerrilleras. Como contracara de ello, la promoción del “modelo colombiano” como experiencia a seguir fructifica en el ofrecimiento de asistencia y asesoramiento en el combate al narcotráfico y la guerrilla que realiza el ministro de Defensa de dicho país al gobierno nicaragüense, tal como lo hiciera en el pasado con Paraguay y Guatemala.

Finalmente, diferentes operativos militares que involucran a efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses tendrán lugar durante estos meses en la América Latina y Caribeña, entre los que se destacan el ingreso —aprobado por el Parlamento— de un importante contingente de soldados de dicho país en Perú para la realización del programa “Nuevos Horizontes 2006” y la realización del ejercicio “Fuerza Comando 2006” en Paraguay, del

que se abstendrán de participar los gobiernos de Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina. Asimismo, habrá de anunciarse el inicio de las negociaciones tendientes a garantizar la instalación de una base militar estadounidense en La Mosquitia, Honduras. El análisis sobre los avances y retrocesos de estas políticas y de los intentos de reconstruir un consenso conservador ahora en base a la “seguridad” (Murillo, 2004) resulta imprescindible, más aún en el contexto de la renovación electoral de gobiernos que recorre la región, para valorar la naturaleza de muchas de las “democracias políticas” latinoamericanas actuales¹⁷.

Sudamérica: entre la integración regional y la estrategia de EE.UU.

El fracaso, en noviembre de 2005, de las negociaciones tendientes a avanzar en el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la cumbre presidencial realizada en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, puso de manifiesto la geografía de los desacuerdos existentes entre los países americanos¹⁸ en torno de la integración regional, así como evidenció la necesidad de fortalecer la construcción de los procesos concebidos desde el sur del continente por fuera del esquema de integración comercial hegemónico promovido por EE.UU. En este contexto, siete meses después, en julio de 2006, se realizará en la ciudad de Córdoba, Argentina, la cumbre de los ahora cinco presidentes del MERCOSUR –Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina), Tabaré Vázquez (Uruguay), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Hugo Chávez (Venezuela)–, donde este último país se incorporará efectivamente como miembro pleno del bloque y se firmará un acuerdo comercial entre el MERCOSUR y Cuba, contando además con la presencia de los presidentes Michelle Bachelet (Chile)¹⁹, Evo Morales (Bolivia) y Fidel Castro (Cuba).

Durante dicha reunión, la canciller paraguaya, Leila Rachid, junto al ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori²⁰, solicitarán autorización para desarrollar a título individual acuerdos comerciales con otros países. En tal sentido, finalmente se resolverá avanzar en la implementación de medidas compensatorias en relación a los desequilibrios que sufren los socios menores (Uruguay y Paraguay), al tiempo que quedará expresada la incompatibilidad entre la pertenencia al bloque y la firma de otros tratados –en particular en relación con los TLCs promovidos por EE.UU. en toda la región.

En este contexto de disputas regionales, la conflictividad social acontecida en el segundo cuatrimestre de 2006 en el Cono Sur alcanzará niveles similares, en cuanto a la cantidad de hechos registrados, a la consignada para el primer tercio del año. Entre ellos se destacan las acciones protagonizadas por los trabajadores del sector privado de la economía. En este sentido, en Argentina²¹ se suceden huelgas en demanda de aumentos salariales en distintas ramas de la actividad (construcción, transporte automotor, servicios), así como también en demanda de mejores condiciones laborales y homologación de los

convenios colectivos. En el caso de Brasil, pueden mencionarse las huelgas de los trabajadores metalúrgicos de la multinacional Volkswagen en tres fábricas de los estados de San Pablo y Paraná contra despidos anunciados por la empresa, así como también en la General Motors (GM) de San José dos Campos (San Pablo, región sudeste), donde los obreros realizan protestas contra notificadas cesantías. Por otra parte, en Chile se destaca la huelga por tiempo indeterminado en reclamo de aumento salarial, entre otras cuestiones, que llevan adelante los trabajadores de la mina La Escondida durante 25 días (ver artículo de Orlando Caputo y Graciela Galarce en este número).

En el caso de los trabajadores del sector público y en el marco de los nuevos compromisos sobre privatizaciones que el gobierno paraguayo asume con el FMI –y que deberían ser cumplimentados antes de fines de 2006–, los empleados de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) y de la Industria Nacional del Cemento (INC) inician, junto a otros movimientos sociales, medidas de protesta. También en Argentina se destacan las huelgas de trabajadores docentes, estatales y universitarios en demanda de aumento salarial; y en Brasil sobresalen las de funcionarios y profesores de la UERJ en Río de Janeiro, que reclaman mejoras en las instalaciones y la equiparación de los sueldos que perciben, así como las huelgas realizadas por los agentes penitenciarios en distintas cárceles del país en demanda de aumentos salariales, en el marco del recrudecimiento de una ola de motines y rebeliones. Por último, en Uruguay los trabajadores realizan protestas en contra de la política económica del gobierno y en rechazo a la firma del anunciado TLC con EE.UU. En este sentido, bajo estas banderas tendrá lugar en mayo el primer paro nacional desde que Tabaré Vázquez asumiera la presidencia en marzo de 2005, convocado por la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).

Por otra parte, también sectores empresariales de Uruguay y Argentina realizan enérgicas protestas que alcanzan gran repercusión política. En el primer caso, disconformes con el proyecto de reforma tributaria en tratamiento por el Parlamento –que incrementa los aportes patronales– y con el aumento del precio del gasoil con que el gobierno pretende financiar una rebaja en el boleto de transporte urbano en todo el país, los empresarios decretan a finales de octubre un paro por tiempo indeterminado con bloqueos y cortes de ruta en las principales carreteras del país, en el marco de un embate político de la oposición contra el gobierno de Tabaré Vázquez²². En respuesta, miles de trabajadores convocados por el PIT-CNT se movilizan en defensa del gobierno y realizan un paro nacional contra las medidas empresariales, en defensa de la democracia y contra las actitudes desestabilizadoras. Por su parte, el gobierno decreta la esencialidad de la distribución de combustible, alimentos y productos perecederos, y de la actividad de los aeropuertos comerciales y puertos, logrando sofocar la medida de fuerza.

***“La cumbre
presidencial realizada
en la ciudad
de Mar del Plata,
Argentina, puso
de manifiesto
la geografía de
los desacuerdos
existentes entre
los países americanos
en torno de la
integración regional,
así como evidenció
la necesidad de
fortalecer la
construcción de
los procesos
concebidos desde
el sur del continente
por fuera del esquema
de integración
comercial hegemónico
promovido por EE.UU.”***

En el caso de Argentina, convocados por federaciones y sociedades rurales locales, los productores ganaderos realizan protestas en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y otras localidades del país contra la suspensión de las exportaciones de carne decretada por el gobierno nacional en marzo como medida de emergencia frente a la fuerte escalada inflacionaria de los precios internos. Por otra parte, en este país se inicia el primer juicio oral contra un represor de la pasada dictadura, tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Estos juicios son el resultado de la infatigable lucha de los organismos de derechos humanos y de una amplia coalición de organizaciones sociales y políticas, que cobra actualidad en el marco de una política gubernamental que auspicia la reconstrucción de la memoria a propósito de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.

En este contexto, asociaciones de militares retirados y oficiales en actividad realizan homenajes a los policías, soldados y civiles caídos en la década del setenta, con el propósito de equiparar la violencia política propia de esos años en América Latina con el terrorismo de estado practicado por la pasada dictadura. De esta manera se plantea una disputa social por el sentido de la reconstrucción de la historia reciente y, consecuentemente, por el juzgamiento de los crímenes cometidos por el régimen militar, al tiempo que se producen otras movilizaciones promovidas por la derecha política en reclamo de seguridad y endurecimiento de la legislación penal, que alcanzan, en algunos casos, masivas convocatorias. Por último, es importante destacar que, en el marco de estas pugnas, desaparece a finales de septiembre Jorge Julio López, uno de los testigos en la causa contra el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense durante la pasada dictadura militar, Miguel Etchecolatz, condenado por cometer secuestros, torturas y asesinatos. Ante este trágico hecho, que resulta en el primer desaparecido por razones políticas desde la recuperación de la democracia en 1983, se realizan importantes movilizaciones sociales en reclamo de su aparición con vida.

En el caso de Brasil, el proceso político-social del segundo tercio del año está atravesado por las elecciones presidenciales, de gobernadores y legislativas (octubre), en un período en el que los hechos de conflicto relevados por el OSAL²³ disminuyen casi un 30% respecto de los consignados para el primer cuatrimestre del año. Sin embargo, aun en este contexto se destacan, por un lado, los motines y rebeliones de los detenidos de las cárceles de San Pablo, Espírito Santo y otras ciudades del país, que conllevan el triste saldo de decenas de muertos, y, por otro lado, las ocupaciones realizadas por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en distintas regiones del país en defensa de la agricultura campesina y la floresta amazónica, contra el monocultivo de soja, y también en reclamo de mayor celeridad en la entrega de tierras y en las desapropiaciones. Asimismo, la violencia en el mundo rural sigue cobrando vidas de campesinos que son asesinados, procesados o detenidos en hechos relacionados con su lucha por la tierra. Ciertamente, la primera vuelta electoral (1/10) no alcanzó para otorgarle el triunfo al presidente Lula, quien en la búsqueda de su reelección obtendrá un 48,6% de los votos, seguido por Geraldo Alckmin (candidato de la Coalición por un País Decente; PSDB-PFL) con el 41,6% y, en tercer lugar, por la candidata del Frente de Izquierda (PSOL-PCB-PSTU), Heloisa Helena, con el 6,9% de los votos. En ese sentido, y en el marco de la campaña electoral hacia la segunda vuelta, los dos primeros candidatos se enfrentarán en torno a cuestiones tales como las privatizaciones, el rol del estado y las políticas sociales, dando lugar a debates y diferenciaciones que habían estado ausentes frente a la primera elección. Finalmente, el 30 de octubre el presidente Lula se impone con el 60,8% de los votos, frente al 39,2% obtenido por su oponente.

Por otra parte, en el campo paraguayo aumentan las protestas de los campesinos en un clima crecientemente represivo que da cuenta de la extensión del Plan Colombia al Cono Sur, el accionar de las guardias de seguridad ciudadana y la presencia militar norteamericana (ver artículo de Marielle Palau en este número). Las principales movilizaciones, cortes de rutas o tomas de tierras que, impulsadas por el movimiento campesino, tienen lugar en estos meses reclaman programas de desarrollo integral, legalización y compra de tierras, pero también la destitución del ministro del Interior, Rogelio Benítez, impulsor de las Comisiones de Seguridad Ciudadana acusadas de torturas, asesinatos y amedrentamiento cotidiano de la población. En este contexto, se realiza en julio, en Ciudad del Este, Paraguay, el II Foro Social de la Triple Frontera, donde alrededor de 3 mil personas de diversas organizaciones sociales de Argentina, Brasil y Paraguay debaten sobre la militarización en la región, los recursos naturales y la criminalización de las luchas campesinas por la tierra, al tiempo que se realiza una misión internacional de observación²⁴ a pedido de las organizaciones sociales paraguayas, que tiene como objetivo verificar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y las consecuencias de la presencia militar estadounidense en dicho país. Por último, a fines de octubre las mujeres de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) logran que

la justicia confirme la sentencia contra los empresarios sojeros acusados de la muerte por agrotóxicos del niño Silvino Talavera.

En Chile la protesta social prácticamente se duplica, en términos cuantitativos, respecto de la registrada en el primer cuatrimestre de 2006, destacándose especialmente en este marco la lucha de los estudiantes secundarios organizados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que a fines de mayo involucrará la movilización de 800 mil estudiantes de 939 colegios (ver artículo de Juan Carlos Gómez Leyton en este número). Durante este conflicto se alcanzan acuerdos referentes al pase escolar y la prueba de selección universitaria, pero el gobierno se niega a realizar modificaciones en la vigente Ley Orgánica de Enseñanza promulgada por Pinochet en 1990.

Por otra parte, las protestas de poblaciones contra las consecuencias ambientales de la industria del papel se suceden en diferentes países de la región. En Valdivia, Chile, el Comité de Defensa del Mar se resiste a la implantación de la planta Celulosa Arauco y Constitución SA, denunciando la contaminación que supone. También en Espírito Santo, Brasil, el movimiento de pequeños agricultores protesta contra la tala de árboles realizada por la transnacional Aracruz Celulosa. Sin embargo, la protesta que llevan adelante los habitantes de la provincia de Entre Ríos, Argentina —especialmente los vecinos de la ciudad de Gualguaychú—, contra la implantación de las plantas de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, sobre el río del mismo nombre, se destaca no sólo por la masividad del movimiento que convoca y los apoyos que conquista a nivel nacional, sino también por el enfrentamiento y tensiones que desencadena entre los gobiernos de dos países miembros del MERCOSUR. En este contexto, si bien el gobierno argentino adhiere al reclamo de los ambientalistas de Entre Ríos, estimula el encauzamiento del mismo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al tiempo que aconseja la suspensión de los cortes de los pasos fronterizos. Hacia comienzos de mayo, los vecinos aceptan la propuesta oficial y levantan los bloqueos, pero finalmente, a mediados de agosto, el fallo del tribunal internacional resulta contrario a la petición argentina de suspensión de la construcción de las plantas. A partir de allí se resiente la relación entre las asambleas ciudadanas y el gobierno, profundizándose las diferencias en torno a la modalidad de las protestas y las perspectivas de resolución del conflicto; también se tensan nuevamente las relaciones entre los dos países al calor de nuevos cortes de ruta organizados por los ambientalistas argentinos en coincidencia con la Cumbre Iberoamericana de Presidentes que se realiza en Montevideo, Uruguay, a comienzos de noviembre.

La prolongación y probable intensificación de este conflicto plantea, cada vez con más fuerza y en su carácter de caso testigo, el necesario debate sobre los modelos de desarrollo actualmente imperantes y en disputa en la región, y sobre la legalidad y legitimidad de las formas de la protesta en momentos en que el mismo proceso de integración supone la

constitución de una nueva jurisprudencia regional. Las definiciones socio-históricas que sobre ambas cuestiones cristalicen tanto a nivel regional como nacional habrán de cumplir, seguramente, un papel de singular importancia en la delimitación de la extensión y profundidad de las alternativas políticas y económicas al neoliberalismo en el continente.

Bibliografía

Ceceña, Ana Esther 2006 "Sujetizando el *objeto de estudio*, o de la subversión epistemológica como emancipación" en Ceceña, Ana Esther (coord.) *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado* (Buenos Aires: CLACSO).

Fukuyama, Francis 2004 *La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI* (Barcelona: Ediciones B).

Gandásogui, h., Marco 2006 "Ampliación del Canal de Panamá: abstención triunfa en referéndum" en *Servicio Informativo ALAI-AMLATINA*, 24 de octubre.

González Casanova, Pablo 2002 "Democracia, liberación y socialismo: tres alternativas en una" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, septiembre.

Murillo, Susana 2004 "El nuevo pacto social, la criminalización de los movimientos sociales y la 'ideología de la seguridad'" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 14, octubre.

Murillo, Susana 2005 "Inseguridad, deslegitimación de la participación política y construcción de actitudes autoritarias en Argentina", Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Quijano, Aníbal 2004 "El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?" en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: UCV-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) Vol. 10, N° 1, enero-abril.

Santos, Boaventura de Sousa (org.) 2002 *Democratizar a democracia, os caminhos da democracia participativa* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).

Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2006 "Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina" en Boron, Atilio A. y Lechini, Gladys (comps.) *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Wacquant, Loïc 2000 *Las cárceles de la miseria* (Buenos Aires: Manantial).

Notas

1 El presente artículo, que ofrece un panorama de lo acontecido en la región latinoamericana y caribeña a lo largo del segundo cuatrimestre de 2006, ha sido elaborado en base a las "cronologías del conflicto social", resultado de una tarea regional de relevamiento y sistematización coordinada por el Programa OSAL, de la que participan equipos de investigación del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP, UERJ, Brasil) y el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA, Argentina). Una versión sintética de las mismas para 19 países del subcontinente puede consultarse a continuación del presente artículo. Las cronologías completas están disponibles en la sección "seguimiento del

conflicto” de la página web del OSAL <<http://osal.clacso.org>>. Para la preparación de este texto también se han considerado los datos sobre la evolución de la conflictividad social a nivel regional que el OSAL sistematiza en base a las referidas cronologías y los informes preparados por el equipo del Programa. A todos ellos nuestros mayores agradecimientos, y especialmente a Emilio Taddei por sus comentarios y a Marcelo Perera y Mariana Enghel por la cuidadosa revisión del texto y sus sugerencias.

2 En contrapartida, los hechos de conflicto disminuyen en Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica.

3 Dicho decreto puede consultarse en la revista *OSAL* N° 19; la misma incluye un dossier que reúne diferentes contribuciones que, desde distintas perspectivas, abordan el análisis del proceso boliviano.

4 Como coordinador general de la misma es elegido Miguel Palacín Quispe, dirigente indígena quechua del Perú, fundador e integrante de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI).

5 La declaración final de dicho encuentro puede consultarse en la sección “seguimiento del conflicto-documentos” de la página web del OSAL <<http://osal.clacso.org>>.

6 Se eligen presidente y vicepresidente de la República, parlamentarios andinos (5), diputados nacionales (100), consejeros provinciales (67), consejeros municipales (674) y juntas parroquiales (10).

7 Los resultados obtenidos por los seis primeros candidatos se completan con el 17,42% para Gilmar Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica), 14,84% para León Roldós (Izquierda Democrática-Red Ética y Democracia), 9,63% para Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano) y 2,19% a favor de Luis Macas (Pachakutik-Nuevo País). Vale señalar que en la elección presidencial el voto nulo sumó 11,73% del total de votos emitidos, siendo en cantidad la quinta opción. En términos de la composición del Parlamento, aún con resultados parciales, pareciera que los escaños obtenidos por el PRIAN y el PSP pueden alcanzar la mitad de la Cámara, siendo que la Alianza PAIS no llevó candidatos a legisladores bajo el programa de convocar, en caso de ganar la presidencia, a una Asamblea Constituyente.

8 En el marco de dichas movilizaciones tendrá lugar la “Cumbre nacional de movimientos sociales y pueblos originarios” bajo el lema “Unidos por la vida y el territorio Inkal Awá”. El repudio a la brutal represión que habría de ahogar las manifestaciones –que costara la vida a un activista indígena– y el reclamo por los derechos de las comunidades indígenas se prolongarán en diferentes conflictos hasta finales de junio.

9 El presidente Bush envía a fines de agosto el acuerdo para su ratificación parlamentaria.

10 En el caso de República Dominicana, la aún pendiente aprobación de las reformas legislativas exigidas por EE.UU. habrá de postergar nuevamente la entrada en vigor del DR-CAFTA.

11 Mediante el PPP se promueven, en el terreno de la energía, tres proyectos principales: la interconexión eléctrica México-Guatemala; el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), y una iniciativa similar entre Guatemala y Belice.

12 El encuentro fue realizado en las tierras del río Chixoy, donde más de veinte años atrás fuera construido, a sangre y fuego, un proyecto hidroeléctrico que significó una cruenta represión y el desplazamiento masivo de la población de la zona.

13 Las llamadas acciones de “desobediencia civil” incluyeron iniciativas de no pago de las facturas, conformación de brigadas barriales para reconectar o impedir el corte del servicio a los morosos, y pintadas en los medidores para imposibilitar la lectura del consumo.

14 Se han realizado numerosos y diferentes señalamientos en relación con esta cuestión. Entre ellos, pueden consultarse los textos de Santos (2002) y Quijano (2004). Por nuestra parte, hemos referido a tal proceso en Seoane, Taddei y Algranati (2006).

15 En este sentido, a manera de ejemplo y denuncia, vale mencionar que el 7 de mayo es asaltada la sede de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC); el 10 de mayo una bomba incendiaria es arrojada en el depósito donde se almacenan los archivos de la antigua Policía Nacional (PN), que contienen documentos que detallan violaciones a los derechos humanos durante los años de guerra interna; y el 6 de mayo es allanada la oficina de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) de Chimaltenango. Por otra parte, el día 13 de mayo es asesinado el secretario de la Coordinadora Metropolitana del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); el 23 de mayo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) denuncia el secuestro en Ciudad Quetzal del dirigente comunitario Oscar Duarte; el 24 de mayo es secuestrado el presidente de la Asociación Integral para el Desarrollo de Ciudad Quetzal y Colonias Aledañas (ASIDECU); y el 26 del mismo mes es asesinado el gobernador del departamento de Sololá.

16 Cabe destacar los permanentes conflictos carcelarios que recorren América Latina.

17 En referencia a ello hemos señalado, en otras oportunidades, la tendencia al pasaje de las llamadas “democracias de baja intensidad” a las “democracias de seguridad”.

18 El gobierno uruguayo firma también por esos días, en la ciudad de Mar del Plata, el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones con EE.UU.

19 En Chile, el Senado aprueba en este período un acuerdo de librecomercio con China y el gobierno suscribe otro con Perú. A su vez, el país ingresa a la Comunidad Andina de Naciones.

20 Luego de importantes divergencias al interior del gobierno uruguayo en torno a la conveniencia de la firma de un TLC con EE.UU., a fines de septiembre el presidente Vázquez anuncia el fracaso de las negociaciones. Sin embargo, unos días más tarde Uruguay inicia nuevos diálogos con EE.UU. para avanzar en la consagración de un tratado bilateral de inversión y comercio. Este nuevo acuerdo le permitiría al gobierno uruguayo respetar el Arancel Externo Común acordado en el MERCOSUR, y a su vez no demandaría la aprobación del Senado de EE.UU. para entrar en vigencia. Por otra parte, el ministro de Economía uruguayo anuncia que se están negociando TLCs con China e India.

21 En Argentina el conflicto social disminuye un 15% en el segundo cuatrimestre del año, en comparación con el período enero-abril, según datos relevados por PIMSA.

22 El 11 de septiembre son procesados los primeros militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en el marco de la apertura de nuevas causas que involucran a jefes civiles y mandos militares, mientras que el 19 de octubre el presidente Vázquez releva al comandante en jefe del ejército por ser anfitrión de reuniones con la oposición.

23 Según datos relevados por el equipo del OSAL Brasil (LPP, UERJ).

24 Ver las conclusiones generales de esta misión internacional en la página web de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) <<http://www.desmilitarizacion.info/>>.